



San Román

El pasado 23 de junio la televisión, nuevamente, logró poner a todo el país frente al espejo. Los acontecimientos del robo, secuestro, cerco policial y muerte de rehenes y delincuentes, vistos en vivo y en directo en todo el territorio nacional puso a los venezolanos delante de su propia realidad.

Los hechos de San Román no es necesario volverlos a describir. Son hartos conocidos. Más aún, no son exclusivos de San Román, aunque para numerosos venezolanos significaron el descubrimiento de lo que le sucede a otros venezolanos con más frecuencia de la que desearían.

Unas semanas más tarde lo que importa es escudriñar la imagen de nosotros mismos que el espejo de San Román nos refleja. Lo que importa es ir más allá de la anécdota y de las discusiones pseudo-policiales y atrevernos a ver nuestra imagen allí, profundizar el conocimiento de nuestra realidad y llegar a conclusiones de las que se deriven propósitos de acción. De lo contrario, San Román se va a convertir en símbolo de lo que nos está pasando como sociedad a lo largo de estos años: padecemos una situación compleja y crítica, somos capaces de describirla hasta sus más mínimos detalles, señalamos con el dedo a las autoridades del Estado y del gobierno culpables de la situación, nos lamentamos de lo que sucede y se va desvaneciendo la atención hasta que sucede algo impactante que desata nuevamente el ciclo.

QUE REALIDAD NOS REFLEJA SAN ROMÁN

Si tomáramos como indicador las reacciones públicas producidas por los acontecimientos de San Román llegaríamos a la conclusión de que el factor más importante de nuestra realidad es la descoordinación e ineficacia de los cuerpos policiales y del gobierno. Su actuación en ese hecho concreto se percibe como el modo normal de actuar de unos y otros. El proceso en este caso es revelador. Las autoridades policiales (Director de la PTJ, por ejemplo) reconocieron en un primer momento la falta de coordinación en la operación y las dificultades evidentes en el manejo de la situación. Al pasar los días y subir de nivel (Ministros) se va forzando la realidad que todos vimos hasta llegar a una versión parecida a la imagen que el gobierno quiere tener de sí mismo y hacer creer al resto de la población. Cuánto mejor sería que hacia dentro y hacia afuera se aprovechara esa experiencia para aprender cómo son los cuerpos policiales en la

práctica, cómo reaccionan las autoridades gubernamentales, cómo se comportan unos delincuentes acorralados y las conductas de los ciudadanos.

*Otra respuesta espontánea ubica el problema en la **inseguridad** que se vive en las ciudades de Venezuela. Es evidente que la inseguridad es un problema clave de la coyuntura actual que vive el país. La inseguridad provocada por el alarmante crecimiento de la delincuencia que afecta en primer lugar a los habitantes de los barrios urbanos y amenaza a otros estratos sociales urbanos. Este nivel de la sensación de inseguridad provoca dos tipos de reacciones complementarias. La primera es exigir del Estado mayor eficacia en su acción policial, aumentar las penas a los delitos y hasta justificar la aprobación de la pena de muerte. La segunda es la "auto-defensa" en todas sus formas: cambiar los hábitos de vida para evitar riesgos, colocar sistemas de seguridad en viviendas, oficinas, urbanizaciones, armarse hasta los dientes, organizarse con los otros vecinos y hasta los linchamientos cuando se agarra a un delincuente con las manos en la masa. Es decir, sustituir al Estado cuando se percibe que no cumple con su función de garantizar la seguridad ciudadana. Por ese camino se llega a "hacer justicia por su propia mano", a la privatización de la función de protección ciudadana y a la disolución de uno de los elementos sustanciales de la vida en sociedad.*

Pero la inseguridad tiene otros niveles más profundos e igualmente sustantivos. Los agentes económicos aducen ese argumento cuando se pregunta por qué no salimos de la recesión. La inseguridad jurídica es patente y sus frutos de inhumanidad preocupantes. El deterioro de los servicios públicos y privados ha ido haciendo insegura nuestra vida social. Sin embargo, la mayor inseguridad la produce la incertidumbre acerca del futuro. No sabemos con certeza a dónde nos dirigimos como sociedad e imaginamos lo peor. Esta incertidumbre tiene una dimensión que nos cuesta reconocer: no hemos sido capaces de proponernos un proyecto de país a cuya realización confluyan los muchos esfuerzos que hacemos los venezolanos por vivir como personas. Nos lamentamos del proyecto que se acabó y de lo que no fue capaz de realizar. Nos solazamos en describir la crisis y sus causas. Nos paralizamos a la hora de diseñar el futuro posible que deseamos, encontrar el camino para alcanzarlo y empezar a caminar por él.

También se nos ha mostrado como parte de nuestra realidad la eficacia de la información junto al papel de los medios de comunicación social. La efectiva acción de la televisión y la radio durante los acontecimientos y de los demás medios después, ha hecho posible que San Román se convirtiera en un debate nacional trascendiendo incluso los hechos mismos. Para el gobierno no ha sido fácil maquillar la imagen de su actuación ni ofrecer una versión acomodada de la actuación policial gracias a que la gente estaba bien informada de los hechos. De aquí se desprende el valor de la información amplia y a tiempo como un elemento fundamental para un auténtico control democrático de las actuaciones del Estado y del gobierno.

Al mismo tiempo hay que señalar el enorme poder de los medios de comunicación para “dirigir” la opinión pública y la consiguiente responsabilidad de quienes los manejan en ese proceso de control democrático de las actividades estatales. La información y los medios a través de los cuales se difunden son tan importantes para la reconstitución del tejido democrático de la sociedad venezolana que no podemos tampoco conformarnos con ser consumidores pasivos de lo que sus dueños nos transmiten. Una comunicación interactiva no es un problema solamente tecnológico. Es, sobre todo, un problema de actitud personal y colectiva. Una vez que se garantiza la información abierta, pluralista y simultánea a los hechos es necesario procesarla. El procesamiento de la información que se recibe a través de la variedad de medios a nuestra disposición es insustituiblemente responsable de cada uno de nosotros. Formarse para aprovechar la información disponible es una de las tareas más importantes que debemos acometer como pueblo. De lo contrario, los medios, es decir, quienes los manejan, se convierten en los nuevos caudillos de la conciencia y de la sociedad y hasta pueden llegar a ser excelentes manipuladores de los estados de opinión y de las decisiones públicas.

MAS ALLA DE LA REALIDAD

Además de coincidir y reafirmar los análisis que han demostrado tanto la descoordinación e imprudencia policiales como la impericia general de las autoridades de los distintos niveles en el manejo de la situación que se presentó en San Román y, más aún, en su interpretación posterior, no debemos desperdiciar esta oportunidad de reflexionar sobre la conducta de los otros actores de los hechos, es decir, de nosotros mismos.

Mientras le reclamamos al gobierno de gastar alegremente los recursos con los que cuenta el país en estos tiempos críticos, aplaudimos con entusiasmo la solicitud que éste hizo de otros ocho mil millones de bolívares para dotación de

los cuerpos policiales. Es evidente que los cuerpos policiales necesitan recursos, no tanto armamento como recursos para la investigación, manejo de la información y capacitación de sus funcionarios. El punto que queremos resaltar es la similitud del modo de reaccionar frente a la situación del gobierno y de la sociedad. Cuando el gobierno lo que propone a raíz de los sucesos de San Román es aplicar con más rigor y a más personas (los delincuentes siguen siendo personas) la Ley de Vagos y Maleantes y, además, solicita una cantidad significativa de recursos adicionales para la represión, obtiene fácilmente el apoyo de la población, especialmente de los sectores medios.

Esa “incoherencia” viene de dos fuentes: la primera, importante pero más superficial, es el tipo de “sentimientos” que se han venido extendiendo en vastos sectores de la población hacia los delincuentes. Ya no se les considera personas, por tanto lo que tenemos que hacer es eliminarlos de cualquier forma (véase el editorial “Contra quien es la guerra contra el hampa” en SIC n° 576, julio 1995, pag. 244); leyes inconstitucionales, como la de Vagos y Maleantes, aplicación de la pena de muerte jurídica o en la práctica ni siquiera se perciben ya como “males menores”, sino como el modo normal de enfrentar el “desborde” del hampa. En esta línea se llegó a un extremo sorprendente: pedir la militarización de las ciudades. ¿Puede considerarse a sí misma democrática una sociedad que pide a las Fuerzas Armadas hacerse cargo del orden público? La sorpresa no se acaba allí. Quien se opuso a una medida de esa naturaleza fue el General de División del Ejército, Moisés Orozco Graterol, Ministro de la Defensa, argumentando lo obvio para cualquier ciudadano de una sociedad democrática, a saber, las funciones de los militares son radicalmente distintas de las policiales y es absolutamente necesario para la salud de la República mantener esa distinción.

La segunda es más de fondo, revela la coincidencia de “cultura política” existente entre los gobernantes y los gobernados. Coincidimos en despachar las responsabilidades siempre hacia arriba, en la tendencia a buscar chivos expiatorios sobre los cuales descargar las culpas colectivas y sentirnos así liberados de toda responsabilidad. Coincidimos en buscar la solución más en la represión a base de leyes más rígidas y más dinero (“a realazos”) que en mejorar la calidad de los servicios policiales y atacar las causas del crecimiento de la violencia social y del auge de la delincuencia.

No rompamos el espejo de nuestra realidad que San Román puso delante de nosotros, veámoslo con cuidado y aprovechemos la oportunidad de encontrar hacia dónde queremos y podemos ir como sociedad.